EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL (*)

Por: Dr. RAUL CHANAMÉ ORBE (**)

SUMARIO:


1. LA CODIFICACIÓN EN EL PERÚ.

Todo proceso de codificación, busca dar una determinada estructura a normas de distinto nivel que generalmente se hallan dispersas, sin coherencias entre sí, elaboradas en distintas épocas y con exigencias disímiles. Si de algo carecen estas normas es de un plan integrador que las unifique.

La Codificación persigue un propósito preconcebido: crear un cuerpo normativo coherente. Las normas dispersas deben integrarse, concordarse y sistematizarse para hacer predecible las acciones de los operadores del derecho. De esas formas las normas no se niegan o contraponen, por el contrario, se ordenan y jerarquizan de acuerdo a un propósito deliberado de brindar y crear seguridad jurídica.

En cuanto a nuestra evolución codificadora, ha sido agitada; muy temprana, esta idea recorrió con entusiasmo las mentes ilustradas de nuestros padres fundadores; sin embargo, independientes no reconocimos la muy meritoria Constitución de Cádiz de 1812 y lo primero que hicimos fue darnos un Estatuto Provisorio (1822) que señalase nuestra completa autonomía, que hiciésemos las veces de Constitución (1); en ese espíritu, el 31 de diciembre de 1825, el propio libertador don Simón Bolívar nombró una comisión especial compuesta por doce juristas presidida por el ilustrado don Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada (1773-1841), para que elaborase los códigos que fuesen necesarios para nuestra flamante república, en la idea codificadora que recorrió Europa tras el Código Napoleónico de 1804 (2). A contrapelo de los ideales bolivianos, estos afanes no prosperaron y en nuestras controversias legales, sin reparos, tuvimos que seguir recurriendo al frondoso derecho español que tanto pretendíamos superar.

(*) La Versión original de este trabajo recibió sugerencias y agregados de Rubén Delgado
(**) Profesor Asociado de la Facultad
La codificación, no implica un simple mecanismo de sistematización de normas; por el contrario, todo indica que constituye la expresión de complejas relaciones del corpus jurídico con el medio que busca ordenar. Siendo así, ni siquiera el Código Civil Peruano-Boliviano (1836) -copia del Código Francés- mucho menos el Código Criminal o el Código de Procedimientos dados durante la fracasada empresa integradora de la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), dirigidas por Andrés de Santa Cruz, tuvieron una mayor legitimidad social ante el caos institucional y la crisis política que sobrevino después de alcanzada la independencia.

A mediados del siglo XIX, maduró la idea de la ilustración en las élites dirigentes peruanas, acicateadas por las idas precursoras de Vidaurre y Santa Cruz, en 1852 nos vamos a dotar del primer Código Civil, a éste, lo acompañaríamos como era la costumbre, de un Código Procesal Civil; en ese mismo año seguirían el Código de Comercio de 1853, el Código Penal y el Código de Ejecución Penal de 1862. Este momento marcará un primer ciclo codificador, acompañado por un periodo de estabilidad institucional secundado también por la larga vigencia de la Constitución de 1860 -interrumpida brevemente por la Carta de 1867- que tuvo autoridad hasta 1920.

En los comienzos del siglo XX, vamos a vivir un segundo ciclo codificador que se inicia con la dación del Código de Minería de 1901 -siendo reemplazado en 1950 por otro más acorde con el desarrollo de la minería- el Código de Comercio de 1901, el Código de Aguas de 1902 -derogado por Decreto ley 1752- el Código Procesal Civil de 1912, el Código de Procedimientos Criminales de 1920, el famoso Código Penal de 1924 -conocido como el Código de Maurtua - el Código Civil de 1936 y el Código de Procedimientos Penales de 1940. En medio de este ciclo se dio la discutida Constitución de 1933 que completaría este segundo gran ciclo codificador en nuestra república.

Evidentemente, en el accidentado siglo XX, en nuestro país han sucedido una serie de hechos que han señalado cambios drásticos en nuestro ordenamiento legal. De un lado, la fragilidad de nuestra institucionalidad, y de otro, súbitos cambios políticos que de manera continua han obligado a actualizar y ordenar el marco de actividad del estado y su relación con los sujetos sociales. Un tercer momento va a ser inaugurado por la Constitución de 1979, que de alguna manera, también anunciaba un nuevo ciclo en el pensamiento constitucional con la influencia de la Constitución italiana de 1947, la Ley Fundamental de Alemania de 1949, la Constitución Francesa de 1958 y la Constitución Española de 1978. La Carta Magna de 1979 buscaba adecuarse a los radicales cambios que se habían producido en la década del setenta en nuestro país; institucionalizar nuevas relaciones jurídicas y satisfacer las nuevas demandas de derechos ciudadanos. La Constitución de manera transitoria, se situaba por delante de este nuevo ciclo codificador, que fue seguido por el Código Civil de 1984, el Código Penal de 1991, el Código Procesal Civil de 1992, el Código Procesal Penal (1991) -que fue suspendido en su mayor parte- y el Código de los Niños y Adolescentes (1993).

Sin duda, este último ciclo no se ha cerrado aún, pues en medio de este periodo, tuvimos la promulgación de la controvertida
Constitución de 1993 y la creciente demanda social por reformar el texto constitucional incluyendo más derechos (Ley 27000). Esto puede explicar el dinamismo de los tiempos actuales, que exigen no sólo adecuarnos a un nuevo orden normativo nacional, sino, estar en consonancia con el mundo institucional y jurídico, que se recrea de manera permanente a nuestro alrededor, con tratados como el Estatuto de Roma que da fundamento a la Corte Penal Internacional. En esta última etapa codificadora aparece el Código Procesal Constitucional, con la singularidad de ser el primer Código nacional del siglo XXI -le ha seguido el Código Procesal Penal- que señala una nueva perspectiva en el desarrollo del derecho procesal constitucional.

2. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.

En nuestro país, el Derecho Procesal Constitucional se ha desarrollado teniendo en Domingo García Belaunde (1944), a su más tenaz propulsor (3). El mérito del destacado constitucionalista, es haber intervenido con éxito en el debate conceptual y el nombre que debería adoptar esta disciplina. Se barajaron algunos nombres tales como: Justicia Constitucional, Jurisdicción Constitucional, Control Constitucional, Defensa de la Constitución o Revisión Judicial (judicial review). Aún más, el debate se hizo más sutil, cuando algunos sostienen que la denominación adecuada debería ser Derecho Constitucional Procesal. Este debate se zanjó a favor de la denominación de Derecho Procesal Constitucional. ¿Por qué? "Si partimos de la tesis de que el Derecho Procesal Constitucional es Derecho procesal (como lo hemos tratado de demostrar en otros ensayos),leranconciduir que nuestra disciplina es aplicada, esto es una rama o división del Derecho Procesal, que se desarrolla sobre un terreno constitucional. Admitida así las cosas, tendríamos que tener una primera entrada que sería el Derecho Procesal, y luego descender hacia el Derecho Procesal Constitucional, en cuanto a disciplina aplicada, pero, que se refiera a la parte constitucional; y de los procesos constitucionales, está compuesta por elementos constitucionales y procesalistas" ("Derecho Procesal Constitucional" 1981).

Teoría General e Historia del Proceso (1945-1972, T. I y II, UNAM, México, 1992. En este transcurrir no debe oviarse el aporte de Mauro Capelleti cuando publica su ensayo Jurisdicción Constitucional de la libertad en 1955, estudio que sería continuado con: El Control de Constitucionalidad de las Leyes en el Derecho Comparado, Milán, 1968, que aportará en el soporte procesal de esta disciplina. En este mismo recuento no se puede dejar de mencionar los aportes de Héctor Fix Zamudio en: El Ejercicio de las Garantías Constitucionales sobre la eficacia del proceso, IX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, Madrid, 1985; La problemática contemporánea de la impartición de justicia y el derecho constitucional, en lus et veritas, PUCP, Lima, 1944. Sin duda el desarrollo de esta disciplina ha sido vertiginoso en los últimos tiempos, pero ella parte de un sólido edificio argumental en la doctrina iberoamericana, habiendo el Perú contribuido en su formulación más reciente.

En síntesis, el Derecho Procesal Constitucional comprende la reflexión sobre las siguientes áreas temáticas:

1. El Derecho Procesal Constitucional de la Libertad.
2. El Derecho Procesal Constitucional Orgánico.
3. El Conflicto Constitucional y sus soluciones.

3. EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.

3.1 ANTECEDENTES.

En nuestro país, los procesos constitucionales, procesos competenciales y jurisdicción supranacional, siempre se legislaron en forma dispersa; aunque apuntaron a buscar un orden en cuanto a sus desarrollos y objetivos, lo cierto era que la normatividad en la cual descansaban estas instituciones, se encontraban en más de 11 leyes y dentro de éstas, indudablemente la más recurrida fue la Ley No. 23506, Ley de Habeas Córpus y Amparo. Estas normas especiales en algunos casos no eran coherententes y en algunos otros no eran completas; además de regular en materia constitucional en forma disjunta, todo aquello se constituía en una dificultad para el trabajo de los jueces y operadores del derecho. También hemos de tener presente que si bien es cierto que en los últimos veinticinco años ha habido una fundamental preocupación por darle determinada jerarquía a los institutos de orden constitucional regulados en las leyes especiales, no se podían evitar las incongruencias sucedidas a raíz del clima político y social que vivió nuestro país en ese período, consecuentemente se hacía cada vez más necesario un estudio y análisis sobre la materia; fue así que en las mentes de un grupo de juristas, se anidaron ideas que perseguían la procreación de un texto normativo que legíse en su conjunto los procesos constitucionales, con una regulación ordenada, integral, sistemática y moderna.

En ese contexto fue naciendo la idea de fundar un Código Procesal Constitucional. Habían antecedentes de referencias, tales como la Ley Jurisdiccional Constitucional de Costa Rica del 11 de octubre de 1986 y el Código Procesal de la Provincia de Tucumán, Argentina, del 09 de octubre de 1995, que tiene una aplicación limitada y no
posee competencias nacionales; sin embargo nuestro país, a la postre, se colocaría en la vanguardia en la región al ser el primero en haber sistematizado en una ley orgánica el contenido esencial de la Constitución en relación a los procesos constitucionales, procesos competenciales y jurisdicción supranacional. Este cuerpo legal bautizado como Código Procesal Constitucional fue elaborado por seis profesores de derecho procesal, constitucional y administrativo y según dan cuenta sus autores en la Exposición de Motivos del Anteproyecto: "...se hizo necesario hacer un replanteo total de las garantías o procesos constitucionales que se reflejan en un nuevo texto normativo. Esa fue la idea de Juan Monroy Gálvez, quien se la comunicó a Domingo García Belaunde en enero de 1994, y entre ambos decidieron unir a un pequeño grupo de personas que pudieron aportar algo desde sus respectivas posiciones, sin descuidar, por cierto, el aspecto procesal civil, procesal penal y administrativo. Así se incorporaron a este grupo Arsenio Oré Guardia, Francisco J. Eguiguren Praeli, Jorge Danés Ordóñez y Samuel B. Abad Yupanqui, equipo que en forma coordinada ha trabajado desde entonces. Este grupo de trabajo retomaba así la preocupación de los abogados de fines del XIX y principios del XX que, sin nombramiento oficial elaboraban durante largos años un determinado cuerpo legal, que luego, eventualmente, se convertiría en derecho positivo."

El Código Procesal Constitucional, es el primer Código nacional del siglo XXI, le siguio el Código Procesal Penal y señala una nueva perspectiva en el desarrollo del derecho procesal constitucional (6).

3.2 VIGENCIA.

Con la publicación de la Ley No. 28237 que establece el Código Procesal Constitucional, se ha dado un salto copernicano en la protección de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución en el Perú. Debemos de resaltar el hecho que constituye el que se publicará el 31 de mayo del 2004 y que su vigencia comenzó a regir luego de seis meses de su publicación, conforme lo estipulará su Segunda Disposición Transitoria que prevé una Vacatio Legis; de esta manera se sucedía un espacio de tiempo prudencial para adecuar las condiciones prácticas necesarias para su correcta aplicación, así como para que se realicen algunas observaciones o aportes adicionales que constituyan posibles mejoras al texto normativo; en suma, transcurrieron seis meses en los cuales hubo una mayor difusión y conocimiento de este cuerpo legal por los jueces y operadores del derecho, así como se rescataron importantes opiniones de juristas y especialistas en la materia; todo aquello contribuyó a preparar el campo de cultivo para cuando entró en vigencia el Código Procesal Constitucional (1° de diciembre de 2004) y que se plasmó en un acontecimiento jurídico de gran magnitud en nuestro país, por ser el primero de su género en la región y por englobar un sistema de normas procesales acorde con la modernidad.

3.3 CARACTERÍSTICAS.

El Código Procesal Constitucional, constituye un gran avance en la tutela de los derechos fundamentales y del orden constitucional, y entre sus características más salientes podemos mencionar:
a. Sistematiza y regula los siete procesos constitucionales que recoge la Constitución de 1993 y que se encontraban legislados en forma dispersa en diferentes normas especiales: Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data, Acción de Cumplimiento, Acción popular, Acción de inconstitucionalidad y conflicto de competencia.

b. Se reconoce que estamos ante procesos de índole constitucional, dejando de lado términos como acciones o garantías constitucionales, tan recurridas en nuestro medio forense; asimismo deja de lado el nombre de recurso de nulidad por un nomen juris mas adecuado y moderno, como es el de recurso de agraviio constitucional.

c. El flamante Código Procesal Cons- Constitucional se sistematiza a través de un Título Preliminar compuesto de 9 artículos; trece títulos con 121 artículos; una disposición final con 7 artículos; y, una disposición transitoria y derogatoria con 2 artículos.

d. El Título Preliminar, al establecer los principios, criterios y reglas que deben observarse en el desarrollo de los procesos que regula el Código, tanto para los propósitos de su interpretación como para su aplicación adecuada, contiene las premisas en las que se sustentan los títulos, como: los alcances, los fines, los órganos competentes, los principios procesales, el control difuso, la interpretación de los derechos constitucionales, los precedentes vinculantes, su aplicación supletoria, entre otros.

e. Del Título Preliminar, se desprende un aspecto interesante en su séptimo artículo, que señala que las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la calidad de cosa juzgada, constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Consideremos que hasta antes de la dación del Código, se habían dado ya casos en el cual el Tribunal Constitucional se había pronunciado, tomando como precedente sentencias anteriores sobre la misma materia.

f. Un punto importante que encontramos incorporado al texto normativo, es la tutela para futuro o “declarativa”, por cuanto puede obtenerse una sentencia que declare un hecho violatorio de un derecho fundamental, aunque este hecho violatorio haya cesado antes de interponer la demanda (el caso de un habeas córpus innovativo) (7) o en el curso del proceso (en el caso de un proceso de Amparo). El espíritu del legislador persigue que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda.

4. CONCLUSIONES.

En términos generales podríamos plantear las siguientes conclusiones:

1. Entre los nuevos derechos incluidos en el proceso de Amparo, debemos de resaltar: El derecho a la igualdad y no ser discriminado por razón de origen, orientación sexual y condición económica, social; el derecho a la negociación colectiva y huelga; a la tu-
tela procesal efectiva; a la seguridad so-
cial y a la remuneración y pensión entre
otros.

2. En cuanto a los aspectos procesales, se
ratifica la procedencia del Amparo con-
tra las resoluciones judiciales firmes
cuando éstas agravien la “tutela procesal
efectiva”, siempre que el demandante no
haya dejado consentir la resolución. Se
entiende por “tutela procesal efectiva”
el acceso a la justicia y la garantía del
debido proceso. En la práctica, el amparo
ante las resoluciones judiciales
irregulares ha sido acogido por
abundante jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.

3. Se establece que en el proceso de Ampa-
ro, no se puede plantear reconvención ni
abandono, sino sólo el desistimiento.

4. En lo referido a las causales de
improcedencia, resulta improcedente la
demanda en caso de existir vías
procedimentales específicas, igualmente
satisfactorias, para la protección del
derecho constitucional, cuya amenaza o
violación se invoca. De esta forma regula
el carácter subordinado de los procesos
constitucionales que serán procedente
únicamente cuando no exista otra vía de
tutela procesal, haciendo que los
procesos constitucionales -excepto el
Habeas Córpus- sea residual y
extraordinario, buscando superar su la-
mentable ordinarización. Esto aclara el
panorama en cuanto a la fecha de la
vigencia del Código Procesal
Constitucional, la judicatura en su
conjunto, incluido el Tribunal
Constitucional como supremo intérprete
de la Constitución, lo habían entendido
como una vía procesal alternativa, en la
que la parte elegía proteger su derecho,
por la vía ordinaria o por la vía
constitucional.

5. En cuanto las medidas cautelares, se
modifica su regulación, al establecerse
que se conceden sin efecto suspensivo,
consecuentemente la impugnación no
suspende su ejecución, salvo que se
busque dejar sin efecto un acto
administrativo. Para su procedencia se
requieren tres presupuestos: 1) La
apariencia del derecho, 2) Peligro en la
demora y 3) Garantías de la eficacia de
la pretensión. Estas medidas cautelares,
inecluyendo la suspensión del acto
violatorio, se conceden sin conocimiento
previo de la otra parte. De esta manera
se dan una mayor eficacia y se aceleran
estos procesos urgentes tendentes a
asegurar el cumplimiento de la futura
decisión judicial a dictarse sobre la
pretensión principal; anteriormente estas
medidas, implicaban una larga espera
para su ejecución, hasta que sea
confirmada por una instancia superior.

6. Regula la acumulación de pretensiones
y de sujetos en los procesos
constitucionales, así como resuelve
problemas de legitimación.

El Código Procesal Constitucional,
presenta una estructura orgánica que
contiene innovaciones y precisiones que
están siendo recogidas por la práctica
constitucional y la jurisprudencia
nacional. Desde el 01 de diciembre que
entró en vigencia, hemos sido testigos
de un nuevo momento en la historia del
derecho procesal y del derecho
constitucional peruano que por sus
alcances, ha ido más allá del ámbito
estructamente forense, por cuanto su Sexta Disposición Final ordena que: “En todos los centros de enseñanza, de cualquier nivel, civiles o militares, se impartirán cursos obligatorios sobre derechos fundamentales y procesos constitucionales”.

Indudablemente, El Código Procesal Constitucional afianza la supremacia constitucional y se constituye en ejemplo para la legislación internacional. Su vigencia hace que la defensa de sus derechos y de la dignidad humana, sea una obligación de todos los peruanos.

NOTAS.


2. Según Gustavo Radbruch: en los años de 1804 creáronse en Francia a instancia y con intervención directa de Napoleón, las grandes obras legislativas que se conocen bajo el nombre de los “Cinco Códigos”: El Código Civil, el Código de Comercio, el Código Procesal, el Código Penal y el Código de Instrucción Criminal. El Código Civil (Code Civil, promulgado en 1804 y conocido desde 1807, con el nombre de Código de Napoleón) compite con el Derecho inglés en cuanto a la autoridad universal y ha influido considerablemente en la legislación de otros países. Hay Códigos Civiles, como el de Baden (1809), tomados casi al pie de la letra del Código de Napoleón. Y otros inspirados directamente en él, como el Código Civil español de 1889, que sirvió de modelo a los códigos de varios países hispanoamericanos. La misión esencial del Código de Napoleón fue instaurar en Francia la unidad jurídica, pues con anterioridad regía en el norte del país el derecho consuetudinario (las coutumes), en el Sur el derecho romano y, paralelamente a uno y otro, un conjunto de reales ordenanzas. Otras de las finalidades del Código Civil napoleónico era plasmar en la legislación los resultados políticos de la Revolución Francesa. En el Código Civil francés, se hace sentir la influencia personal de Napoleón, muy señaladamente en el Derecho de Familia, al que el emperador imprimió un sello marcadamente patriarcal. Desde el punto de vista jurídico, tuvo la parte más importante en la redacción de ésta obra legislativa el gran jurista francés Portalis (1745-1807). CHANAMÉ ORBE, Raúl: Diccionario Jurídico Moderno, Grafica Horizonte, 3ª Edición, Lima, 2002, pág. 209.


4. GARCÍA BELAÚNDE, Domingo: De la Jurisdicción Constitucional al


7. Tipos de Hábeas Corpus:
   - Hábeas Corpus Reparador: Frente a la privación arbitraria e ilegal de la privación física. Busca reponer las cosas al estado anterior de la violación.
   - Hábeas Corpus Restringido: Ante una continua y pertinaz limitación de la libertad personal.
   - Hábeas Corpus Correctivo: En casos lesivos de la integridad personal, buscan que cesen los maltratos contra un detenido.
   - Hábeas Corpus Preventivo: Cuando se amenace de manera cierta y concreta la libertad personal, la amenaza real es un asunto de casuística que debe tener en cuenta el juez.
   - Hábeas Corpus Traslativo: Cuando se produce mora en el proceso judicial y otras graves violaciones al debido proceso.
   - Hábeas Corpus Innovativo: Para que el afectado no vea restringido a futuro su libertad y derechos conexos.
   - Hábeas Corpus Instructivo: Ante el caso de una persona detenida desaparecida por una autoridad particular que niega la detención y por eso es imposible ubicarla.

BIBLIOGRAFÍA.


